

Hay frases que parecen inocentes hasta que se pronuncian desde el poder. «Pongo la mano en el fuego» es una de ellas. En una conversación privada puede ser una manera enfática de expresar confianza. En política, en cambio, tiene otro alcance: quien la pronuncia no solo habla de una persona; también compromete su propio criterio.

María Jesús Montero ha demostrado en más de una ocasión que la confianza ocupa un lugar importante en su manera de hacer política. No hace mucho llegó a definirse como la mujer con más poder de la democracia española. Una afirmación de semejante calibre obliga, precisamente por eso, a preguntarse qué entiende un gobernante por poder. Porque el poder no es solamente capacidad de influencia. Es, sobre todo, responsabilidad.

Montero ha reiterado su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero. Está en su derecho. La confianza política es legítima y la presunción de inocencia no debería admitir excepciones. No corresponde a un dirigente político dictar sentencias ni anticipar responsabilidades que corresponden a otras instituciones. Pero tampoco conviene confundir los planos. Confiar no es gobernar.

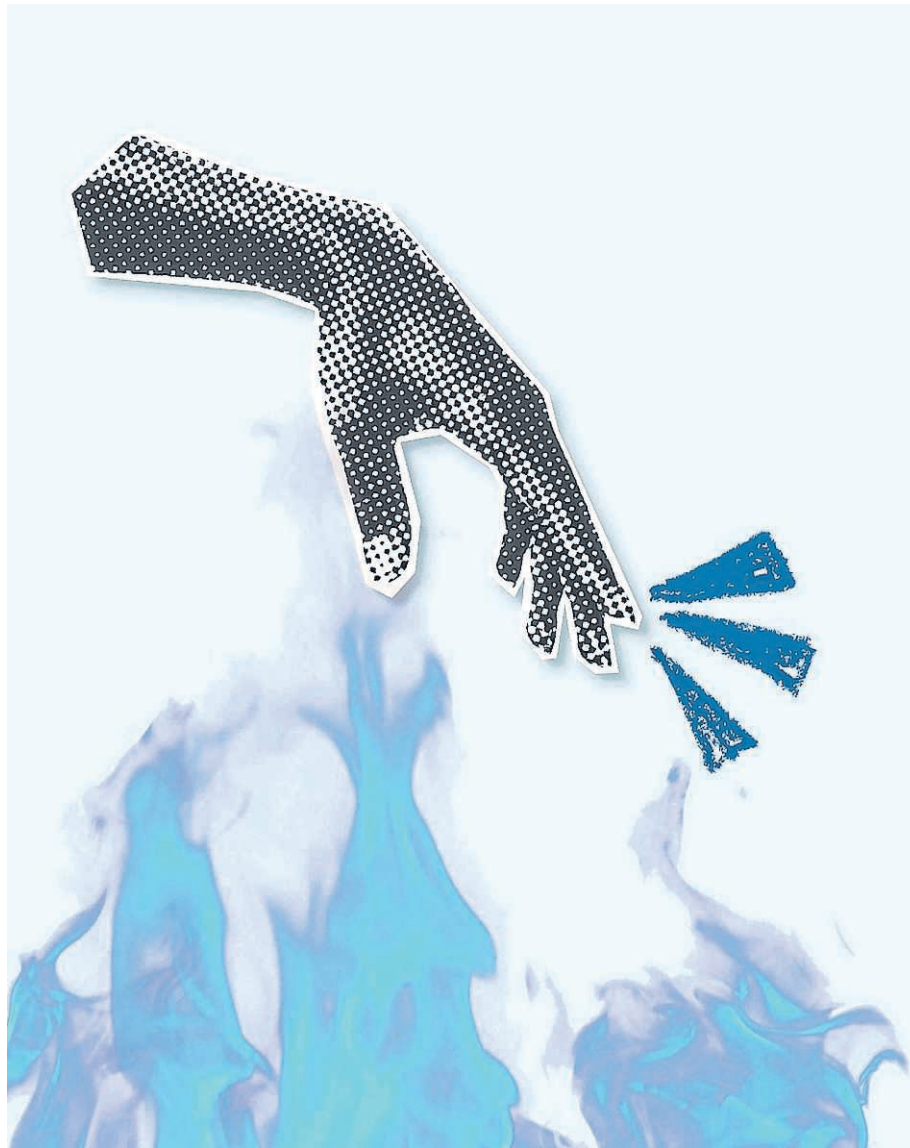
La autoridad de un gobernante no se demuestra por la intensidad con la que defiende a los suyos, sino por su capacidad para garantizar que las instituciones funcionan con independencia de las personas. Un Gobierno no debería necesitar ministros dispuestos a poner la mano en el fuego por nadie. Debería disponer de controles que hicieran innecesario ese gesto.

La confianza puede ser personal. Los controles tienen que ser institucionales. Una cosa pertenece al terreno de las convicciones; la otra, al de las obligaciones.

Montero conoce, además, el riesgo de las afirmaciones demasiado rotundas. En el pasado utilizó la misma expresión al defender a Santos Cerdán. Después llegaron circunstancias políticas muy diferentes de aquellas en las que pronunció aquellas palabras. No hace falta convertirlo en un reproche. Los políticos, como los demás ciudadanos, pueden equivocarse al juzgar a las personas. Lo que importa es qué se hace después, cuando una confianza personal quizá no estaba suficientemente respaldada por los hechos.

La política debería tener una relación más prudente con las certezas absolutas. La realidad suele ser bastante menos disciplinada que una rueda de prensa. Y en ese escenario aparece Oscar Puente, que parece haber encontrado en el personaje del polemista permanente una segunda naturaleza. Tiene rapidez, desparpajo y una facilidad extraordinaria para convertir cualquier asunto en una trifulca. El problema es que, cuando esa actitud procede de un ministro, deja de ser simplemente una extravagancia personal. Un miembro del Gobierno no puede comportarse como el bufón de la corte digital, pendiente de cada provocación, buscando el aplauso de su parroquia y necesitado de cerrar cada discusión con un tuit. El espectáculo puede proporcionar notoriedad; lo que no proporciona es autoridad.

La misión de un ministro no es tuitear. No es ganar discusiones en X, ni responder a cada adversario, ni medir su eficacia por el número de polémicas que consigue alimentar en un día. Un ministro tiene que gestionar, decidir, explicar, rendir cuentas y resolver problemas. Tiene que ocuparse de los trenes, de las carreteras, de las infraestructuras y de aquello que afecta a los ciudadanos, no de demostrar que tiene una réplica más ingeniosa que su último crítico. Cuando un ministro dedica más tiempo a contestar que a gobernar, algo se ha torcido. Y cuando convierte la provocación en método, el poder acaba confundiendo autoridad con ruido.



HERALDO

PERSPECTIVAS

| José Miguel Sánchez

Confiar no es gobernar

La política necesita debate, por supuesto. Pero el enfrentamiento permanente no es sinónimo de firmeza. A veces es exactamente lo contrario: una forma de dejar que sean otros quienes marquen la agenda. Un ministro verdaderamente fuerte no necesita demostrar todos los días que lo es. Puede permitirse escuchar, callar y actuar.

Puente, además, debería recordar que no habla únicamente en su nombre. Cada una de sus declaraciones lleva detrás la responsabilidad del Gobierno del que forma parte. Esa diferencia entre la opinión de un político y la palabra de un miembro del Ejecutivo no es menor. En democracia, las formas también forman parte del fondo.

Por eso la cuestión vuelve al principio: gobernar no consiste en poner la mano en el fuego por los propios, ni en salir al paso de cada adversario, ni en demostrar quién grita más alto. Gobernar consiste en garantizar que las instituciones funcionan, que los controles existen y que quienes ejercen el poder responden ante los ciudadanos.

Un ciudadano puede decir: «Yo confío en él». Un ministro debería poder añadir: «Y estas son las razones, estos son los controles y estos son los hechos que permiten sostener esa confianza». La diferencia parece

pequeña. No lo es. La confianza es una virtud privada que puede tener consecuencias políticas. La responsabilidad pública es una obligación que no puede delegarse en la confianza. Por eso quizá deberíamos abandonar esa costumbre de convertir cada defensa política en una prueba de fe. Poner la mano en el fuego puede tener algo de nobleza personal, pero el Estado moderno no puede funcionar mediante juramentos personales. Necesita procedimientos, transparencia, controles y rendición de cuentas.

Montero puede confiar en Zapatero. Puente puede defender al Gobierno. Todo eso forma parte legítimamente de la política. Pero ninguno de ellos debería olvidar dónde empieza su verdadera obligación: no en responder por sus compañeros, sino en responder ante los ciudadanos. Porque la confianza puede cambiar con el tiempo. La credibilidad institucional cuesta mucho más recuperarse. Gobernar consiste en saber cuándo hay que preguntar, cuándo hay que comprobar, cuándo hay que decidir y, si llega el caso, cuándo hay que rectificar.

Y en esa tarea hay una institución que merece una consideración especial: la Corona. La Monarquía no es un adorno protocolario ni una pieza intercambiable del

paisaje político. Es la Jefatura del Estado y una de las instituciones que vertebran nuestro sistema constitucional. Su función consiste precisamente en representar la continuidad del Estado por encima de los gobiernos de turno y de las mayorías circunstanciales. En una democracia cada Gobierno puede cambiar; el Estado permanece. Y la Corona simboliza esa permanencia.

Por eso defender la Monarquía no significa defender a un partido, ni a un Gobierno, ni exigir que nadie renuncie al debate sobre la institución. Significa defender una pieza esencial del marco constitucional que los españoles se dieron y que garantiza una representación de la nación situada por encima de la batalla partidista. En tiempos en los que todo parece susceptible de ser convertido en arma electoral, resulta más necesario que nunca preservar instituciones que no estén sometidas al vaivén de cada polémica. La Corona debe ser respetada porque representa algo que los políticos deberían recordar con más frecuencia: España es mucho más que el Gobierno que ocupa hoy el poder. Y precisamente por eso la defensa de la Corona no puede ser tímida ni vergonzante. Quienes creemos en la Monarquía parlamentaria tenemos que decir con claridad que no aceptamos que se convierta al Rey en otro protagonista de la guerra partidista ni que se pretenda presentar la institución como un obstáculo para la democracia. La Corona forma parte de la democracia constitucional española, no está fuera de ella. Su fortaleza reside en servir al Estado, no a un partido; en representar a todos, no a una facción. Cuando la política se empequeñece hasta convertir cada institución en un campo de batalla, la respuesta no debe ser destruir aquello que permanece, sino recuperar el respeto por lo que nos une.

La política española necesita menos fe y más Estado. Menos manos en el fuego y más manos sobre los expedientes. Menos ministros preocupados por tener la última palabra y más servidores públicos preocupados por dejar las cosas mejor de como las encontraron. El poder no consiste en conocer a los poderosos, ni en defender a los propios hasta el último instante, ni en ganar una discusión en las redes. El verdadero poder es poder responder ante un ciudadano sin esconderse detrás de un partido, de un compañero o de una consigna.

Y quizá por eso la Corona importa más de lo que algunos quieren reconocer. Porque cuando todo cambia, cuando los gobiernos pasan, cuando las mayorías se rompen y cuando la política se convierte en una batalla de trincheras, España necesita algo que permanezca. La Monarquía parlamentaria no está para competir con los partidos, sino para sobrevivirlos; no para gobernar, sino para representar al Estado cuando los gobiernos cambian. Esa continuidad, en tiempos de polarización y de ruido, no es un lujo: es una garantía.

Al final, la cuestión no es a quién ponemos la mano en el fuego. La cuestión es qué queda en pie cuando las llamas llegan. Y un Estado serio no puede depender de la temperatura de la confianza de sus gobernantes. Necesita instituciones que resistan el calor, controles que funcionen y responsables políticos capaces de comprender que el poder pasa, pero España permanece.

Ese debería ser el verdadero significado de gobernar: no dejar tras de sí una colección de tuits, de enfrentamientos o de lealtades personales, sino instituciones más fuertes de las que se encontraron. Porque los ministros pasan. Los gobiernos pasan. Las polémicas pasan. Lo único que no debería pasar es el Estado.

José Miguel Sánchez es director general de Cámara Zaragoza